

Bogotá D.C,

Doctor
JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ
Magistrado Tribunal Administrativo del Quindío.
Ciudad

Referencia: Proceso: N° 63001-2333-000-2019-00234-00
Demandante: Fernando de Jesús Calle Moreno
Demandada: Contraloría General de la Republica
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Asunto: Alegatos de Conclusión de instancia.

Efrén Bermeo Vélez, ciudadano mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 4.941.358 de Tarqui (H), con T.P. No. 105.085 del C. S. J., obrando en calidad de apoderado de la Contraloría General de la República, de conformidad con el poder que en legal forma se me ha conferido, acudo en representación de la parte demandada ante el despacho para presentar los alegatos de conclusión de primera instancia, ratificar lo expuesto en la contestación de la demanda y lo contenido en el fallo de responsabilidad fiscal (00001 DEL 25 DE FEBRERO DE 2019) producto del proceso de responsabilidad fiscal PRF-2017-01200, el cual aquí se pretende su nulidad en los siguientes términos:

I. Antecedentes que dieron origen al proceso de responsabilidad fiscal PRF. 2017-01200.

Se tiene como antecedentes que dieron origen al proceso de responsabilidad fiscal PRF-2017-01200, el siguiente:

Con ocasión del ejercicio auditor, el grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental colegiada de Quindío, emitió informe final de la **Denuncia 2016-95575-80634-D**, adelantada por presuntas irregularidades acaecidas en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 08 «CACIQUE CALARCÁ», que involucraban los contratos de suministro No. 052 BASPC8-2014 y 0162 BASPC8-2015 y el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078 BASPC8-2014, decidiéndose en mesa de trabajo del 25 de agosto de 2016 dentro de la Denuncia 2016-95575-80634-D, solicitar la apertura de una indagación preliminar para establecer si la inversión a través del contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC8-2014 terminó en una obra inútil, lo que se configuraría como un daño al patrimonio público.

Producto del ejercicio anterior, se originó la indagación preliminar fiscal ANT_IP-2016-01960, la cual culminó con el cierre a través del Auto No. 002 del 27 de abril de 2017 y **la orden de apertura de proceso de responsabilidad fiscal**, que nos ocupa, por los hechos relacionados únicamente con el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078 BASPC8-2014, celebrado por el BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL

COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCÁ» NIT. 800.130.829-8 y la firma RIMARCO SAS, el cual fue suscrito por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M-CTE (\$585.200.000,00).

Es de anotar que mediante Auto No. 00091 del 21 de noviembre de 2017, se aperturó e imputó responsabilidad fiscal, estableciéndose el referido detrimento patrimonial por valor de \$541.803.439,13, tal y como había quedado plasmado en el Auto No. 002 del 27 de abril de 2017, acotándose que en esta providencia se dispuso la vinculación de los presuntos responsables fiscales, entre los cuales se encuentra el hoy accionante.

Como aspectos relevantes el despacho en dicho proveído destacó:

Está probado que el 24 de diciembre de 2014, se celebró el Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078 BASPC8- 2014, entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - **BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 8 “CACIQUE CALARCÁ”** a través del señor Teniente Coronel **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, en su condición de Comandante y Ordenador del Gasto del Batallón BASPC No. 08 “Cacique Calarcá”, debidamente facultado para celebrar contratos, según Resolución Ministerial 6345 del 14 de septiembre de 2012 y Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, y la firma **RIMARCO SAS** - NIT. 900.075.341-3, representada legalmente por la señora **JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO**.

El negocio contractual tenía por objeto el «*MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8*», tal y como se desprende de los apartes plasmados en la parte considerativa del Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078 BASPC8- 2014, donde se indicó: «(...) d) *Que tal como se advierte en los estudios previos de necesidad y conveniencia elaborados por el Gerente de Proyecto, El Ejército Nacional, como entidad integral, y de acuerdo a los recursos asignados al BATALLÓN DE SERVICIOS N° 08 “Cacique Calarcá”, determina que los recursos asignados por el Rubro Presupuestal: A-204-5-1 10CSF MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, serán usados en pro del cumplimiento de la misión de la BATALLÓN DE SERVICIOS N° 08 “Cacique Calarcá” para la puesta en funcionamiento de la central contable y administrativa del eje cafetero.* (Ver CD F. 243- Pág. 8 y siguientes del documento digital: folder 0407 contrato 78).

A su turno y paralelamente, también obra en el plenario, constancia de la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 079-BASPC08-2014 de fecha 24 de diciembre de 2014, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 8 “CACIQUE CALARCÁ” a través del señor teniente coronel **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, en su condición de comandante y ordenador del gasto del Batallón de BASPC No. 08 «Cacique Calarcá», debidamente facultado para celebrar contratos, según Resolución Ministerial No. 6345 del 14 de septiembre de 2012 y Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, y el hoy accionante la firma **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.** NIT. 900.129.037-2, por medio de su representante legal señor **JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.579.022, cuyo objeto consistió en:

«CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8». (Ver CD F. 524 - Pág. 249 y siguientes del documento digital: tomo 1 contrato No. 079 2014).

Para el despacho es evidente que la inversión de los recursos iba destinada al mantenimiento y adecuación de una edificación donde funcionarían las oficinas del CENAC - Armenia y que a pesar de que se desembolsaron los recursos y se ejecutó la obra, ésta no cumplió su objetivo, es decir, los recursos fueron inutilizados o enterrados en una obra que para el Estado es improductiva y no cumplió su finalidad, en armonía con lo plasmado por la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-340¹ de 2007, donde de manera particular indicó:

...Es claro que en la primera hipótesis, hay un daño susceptible de ser cuantificado, atribuible al detrimento de los bienes, o a la pérdida de utilidad, o al valor de los recursos inutilizados o enterrados en obras improductivas, etc... (Resaltado y subrayas fuera de texto).

En conclusión, para el Ente de Control se tuvo la certeza suficiente frente al incumplimiento de la finalidad de la contratación materializada en el Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078 BASPC8- 2014 y a las obligaciones específicas, pese a la erogación presupuestal que finalmente no representó utilidad para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCÁ», en la suma establecida de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 13 CTVS (\$541.803.439,13)**, como valor pagado al contratista por una edificación sin terminar, que incumple los requisitos de construcción sismo resistente y pone en riesgo a las personas que decidan habitarlo, constituyéndose el valor en mención.

Por su parte, en el fallo con responsabilidad fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019, se ratificó el detrimento patrimonial, ello en la medida que dentro de la controversia probatoria no se logró atenuar, disminuir o desvirtuar el valor dentro de la decisión definitiva.

Se destaca en el proveído en cita, a mayor profundidad y en extensión las diversas irregularidades relacionadas con las etapas precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato 078 BASPC08-2014, así:

Para el año 2014, el Batallón de BASPC No. 08 «Cacique Calarcá», adelantó un proceso de selección pública el cual partió de la siguiente necesidad plasmada en los estudios previos (CD F.243):

«1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

¹ Referencia: expediente D-6536 - Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 «por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías». - Demandante: Luis Alberto Sepúlveda Villamizar. - Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL - (9) de mayo de dos mil siete (2007).

El ejército nacional ha dispuesto la creación de la central administrativa y contable del eje cafetero en la ciudad de Armenia, razón por la cual debe habilitarse una edificación de las existentes en la unidad militar, para funcionar como CENAC y centralizar allí todas las funciones administrativas y contables de las unidades centralizadas en el eje cafetero». (Negritas del despacho).

Luego de surtido el proceso de selección, se suscribió el contrato de obra No. 078-BASPC8-2014 del 24 de diciembre de 2014, en el cual se estipuló (CD F.243):

«... g) Que con base en las consideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el presente contrato del cual hacen parte integral los documentos expedidos durante el proceso de selección y aquellos presentados por el contratista en su propuesta adjudicataria. CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente contrato de obra es el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8, de acuerdo a los estudios previos de la entidad y la propuesta adjudicataria» (Subrayado fuera de texto)

Dos semanas después de haberse suscrito el acta que dio inicio al contrato el 13 de enero de 2015, se llevó a cabo la demolición de la infraestructura que iba a ser objeto de habilitación y se empezó de cero con la construcción de una obra nueva.

Como se observa la entidad planeó y contrató obras y actividades de mantenimiento, sin embargo, se evidenció del expediente contractual y de la visita de campo, que las obras y actividades realizadas fueron la demolición de una edificación existente de un piso y la construcción de una obra nueva de dos pisos, sin contar con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y lo más delicado, sin cumplir los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10, por lo tanto, debe evitarse su ocupación por los miembros del Ejército Nacional.

En otras palabras, la edificación hecha no debe ser habitada, pues pone en un alto riesgo la vida de los ocupantes en el momento en que se presente un sismo de considerables proporciones, pues se encuentra en una zona de Colombia donde los fuertes sismos son relativamente frecuentes, y por eso la Norma NSR-10 ubica a Armenia en una Zona de Amenaza Sísmica ALTA.

Lo anterior, indica que se configura un daño patrimonial al Estado por el valor pagado a la firma contratista que asciende a **\$541.803.439,13**, toda vez, que la edificación no debe ser empleada en el estado en que se encuentra.

Los mencionados hechos se extractan del informe técnico rendido por el ingeniero civil **HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE**, quien para su preparación realizó una revisión documental del expediente de trámite de la denuncia ciudadana No 2016-95575-80634-D y del expediente

contractual digitalizado del contrato de obra 078-BASPC8-2014 del 24 de diciembre de 2014. Así mismo, efectuó visitas al sitio de la obra.

Cabe aclarar que para la realización de las visitas especiales efectuadas al sitio de la obra de marras, fueron enviadas comunicaciones a todas las partes implicadas en el presente proceso, aunado a ello del informe técnico rendido, se corrió traslado a todas las partes como garantía procesal del derecho de defensa y contradicción y en su momento procesal contra él mismo se requirió aclaración por solicitud de las partes, lo cual quedó plasmado en el análisis del material probatorio del fallo, al cual más adelante se hará mención, quedando el informe técnico en firme, en la octava sesión de la audiencia de descargos surtida el día 31 de agosto de 2018.

Lo expuesto pone de manifiesto que en el caso particular existe un daño por la existencia de una obra que no cuenta con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y que incumple los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10.

La obra contratada que inicialmente era de habilitación y remodelación de obra ya existente, posteriormente se convirtió en la construcción de una obra nueva, se cambió su objeto, sin observar los requerimientos normativos, por tanto, no cumplió los fines esenciales del Estado.

Por lo dicho, se tiene certeza, seguridad y está probado que existe un detrimento fiscal por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M-CTE (\$541.803.439,19), el cual de acuerdo con las características del daño es presente, cierto y real y se encuentra debidamente cuantificado en la suma indicada no indexada.

Se establece indefectiblemente que no hubo planeación sobre la construcción destinada a las oficinas de la Central Administrativa y Contable CENAC Armenia del Ejército Nacional pues no se evidenció en el expediente contractual la existencia de planos estructurales, memorias estructurales y más delicado aún, licencia de construcción la cual debía incluir también la autorización de demolición total, contraviniendo la Ley 400 de 1997 *«Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes»* y el Decreto 1469 de 2010 *«Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones»*, tal y como quedó en letras anteriores.

Ahora bien, con relación a la responsabilidad fiscal atribuida al aquí accionante T.C. **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.322.663, quien en calidad de demandante y ordenador del gasto celebró con la empresa RIMARCO SAS NIT. 900.075.341-3, el contrato de mantenimiento y adecuación No.078-BASPC08-2014, en el fallo con responsabilidad fiscal que más adelante se traerá a colación quedaron plasmados con lujo de detalles los motivos por los cuales fue considerado responsable fiscal; lo anterior está descrito de manera detallada en los actos demandados, que señor Magistrado puede

verificar junto con el análisis del material probatorio arrojado de manera legal y oportuna al expediente.

II. HECHOS GENERADORES DEL DAÑO FISCAL.

Para el año 2014, el Batallón de BASPC No. 08 «Cacique Calarcá», adelantó un proceso de selección pública el cual partió de la siguiente necesidad plasmada en los estudios previos (CD F.243):

«1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

*El ejército nacional ha dispuesto la creación de la central administrativa y contable del eje cafetero en la ciudad de Armenia, razón por la cual debe **habilitarse una edificación de las existentes** en la unidad militar, para funcionar como CENAC y centralizar allí todas las funciones administrativas y contables de las unidades centralizadas en el eje cafetero». (Negritas del despacho).*

Luego de surtido el proceso de selección, se suscribió el contrato de obra No. 078-BASPC8-2014 del 24 de diciembre de 2014, en el cual se estipuló (CD F.243):

*«... g) Que con base en las consideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el presente contrato del cual hacen parte integral los documentos expedidos durante el proceso de selección y aquellos presentados por el contratista en su propuesta adjudicataria CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente contrato de obra es el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8, **de acuerdo a los estudios previos de la entidad** y la propuesta adjudicataria» (Subrayado fuera de texto)*

Dos semanas después de haberse suscrito el acta que dio inicio al contrato el 13 de enero de 2015, se llevó a cabo la demolición de la infraestructura que iba a ser objeto de habilitación y se empezó de cero con la construcción de una obra nueva, cambiando así el objeto del contrato.

Como se observa la entidad planeó y contrató obras y actividades de mantenimiento, sin embargo, se evidenció, del expediente contractual y la visita de campo, que las obras y actividades realizadas fueron la demolición de una edificación existente de un piso y la construcción de una obra nueva de dos pisos, **sin contar con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción, sin cumplir los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10, por lo tanto, debe evitarse su ocupación por los miembros del Ejército Nacional.**

En otras palabras, la edificación hecha no debe ser habitada, pues pone en un alto riesgo la vida de los ocupantes en el momento que se presente un sismo de considerables proporciones, pues se encuentra en una zona de Colombia donde los fuertes Sismos son relativamente frecuentes, y por

eso la Norma NSR-10 ubica a Armenia en una Zona de Amenaza Sísmica ALTA.

Lo anterior, indica que se configura un daño patrimonial al Estado por el valor pagado a la firma contratista que asciende a **\$541.803.439,13**, toda vez, que la edificación no debe ser empleada en el estado en que se encuentra.

Los mencionados hechos se extractan del informe técnico rendido por el ingeniero civil **HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE**, quien para su preparación realizó una revisión documental del expediente de trámite de la denuncia ciudadana No 2016-95575-80634-D y del expediente contractual digitalizado del contrato de obra 078-BASPC8-2014 del 24 de diciembre de 2014. Así mismo, efectuó visitas al sitio de la obra.

Cabe aclarar que para la realización de las visitas especiales efectuadas al sitio de la obra de marras, fueron enviadas comunicaciones a todas las partes implicadas en el presente proceso, aunado a ello del informe técnico rendido, se corrió traslado a todas las partes como garantía procesal del derecho de defensa y contradicción y en su momento procesal contra él mismo se requirió aclaración por solicitud de las partes, lo cual quedó plasmado en el análisis del material probatorio quedando el informe técnico en firme, en la octava sesión de la audiencia de descargos surtida el día 31 de agosto de 2018.

Lo expuesto pone de manifiesto que en el caso particular existe un daño por la existencia de una obra que no cuenta con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y que incumple los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10.

La obra contratada que inicialmente era de habilitación y remodelación de obra ya existente, posteriormente se convirtió en la construcción de una obra nueva, se cambió su objeto, sin observar los requerimientos normativos, por tanto, no cumplió los fines esenciales del Estado.

Por lo dicho, se tiene certeza, seguridad y está probado que existe un detrimento fiscal por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M-CTE (\$541.803.439,19), el cual de acuerdo con las características del daño es presente, cierto y real y se encuentra debidamente cuantificado en la suma indicada no indexada.

El daño arriba descrito fue producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, toda vez que el ejercito representado por el señor Fernando de Jesús Calle Moreno, con su gestión no optimizó los recursos asignados para un proyecto de remodelación en cuanto recibió y pago con recursos del erario público una obligación contractual que no cumplía con las características necesarias para lograr el objeto inicial, para lo cual fue contratado y cumplir con los fines esenciales del Estado, generando un daño patrimonial al Estado, toda vez que muy a pesar de haberse invertidos unos recursos de manera inadecuada no se cumplió con el fin esperado por cuanto dicha obra no cuenta con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y que

incumple los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10, no es aceptable en pleno siglo XXI para este Ente de Control que los servidores públicos hagan lo que quiera con los recursos convirtiéndose ello en otra manera de corrupción de la cual el País está cansado, pues no se trata de invertir recursos por invertir, ya que estos tienen un fin, que para el caso que nos ocupa no se cumplieron, y más aun no aplicaron las normas de contratación que para el caso de una obra se requiere.

III. ARGUMENTOS DE DEFENSA.

Para el caso que nos ocupa es procedente mirar la imputación de responsabilidad fiscal que con llevo que conllevo a la decisión final -Fallo con responsabilidad fiscal- que le declaró como responsable fiscal, con el objeto de desvirtuar los argumentos expuestos por los apoderados de la parte actora, veamos:

"RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR TENIENTE CORONEL FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO..."

*En cuanto a los señores Teniente Coronel **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, quien ostentaba la calidad de Comandante y Ordenador del Batallón de ASPC No. 08 "CACIQUE CALARCÁ" y celebró con la empresa RIMARCO SAS... el Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078-BASP08-2014 del 24 de diciembre de 2014...por tanto les asistía a los mencionados militares la obligación de **ejercer la vigilancia del negocio contractual**, pues tenían el poder habilitante de manejar, administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos a ellos asignados...**Por otro lado tenían el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales...**" (Las negrillas son nuestras).*

Además, es importante destacar que en parágrafos subsiguientes dentro del cuerpo del escrito de imputación, se le indicó:

...Es preciso señalar que el artículo 4º de la Ley 80 de 1993 determina los deberes que los servidores públicos deben tener en cuenta en la celebración y ejecución de los contratos estatales, así:

*"**Artículo 4º.-** De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:*

*"1. **Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.** Igual exigencia podrán hacer al garante (...)" (Negrillas son nuestras).*

(...)

*4.- **Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas**, servicios prestados o bienes suministrados, para que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y **promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos** y sus garantes **cuando dichas condiciones no se cumplan.** (Negrillas son nuestras).*

5.- Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con

normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia

(...)

8.- Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa...".
(Negrillas son nuestras).

Como se evidencia de lo anterior, los representantes legales y/o ordenadores del gasto de las entidades estatales, tienen la obligación legal de controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, condiciones y términos de la invitación y las especificaciones del contrato, convenio o concertaciones celebradas por las entidades públicas dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente. (Negrillas son nuestras).

Debe destacarse que de conformidad con la Resolución No. 6345 del 14 de septiembre de 2012 "Manual de contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus unidades ejecutoras 2012" del Ministerio de Defensa Nacional, en el punto 3. "**Principios y Deberes**" determina **que la gestión contractual del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, debe adelantarse de conformidad con los principios y deberes que rigen la contratación estatal** (art. 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993), como son: **transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, ecuación contractual, interpretación de las reglas contractuales**. (Las negrillas son nuestras).

Así mismo, se estipula en la citada resolución que los principios que rigen la contratación estatal están amparados en los que rigen la función administrativa y que le son igualmente aplicables, los cuales están delimitados en el artículo 209 de la Constitución Política y el Código Contencioso Administrativo hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, los cuales son: Igualdad, Moralidad, Eficacia, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad.

Finalmente, la gestión contractual debe realizarse igualmente de conformidad con los principios generales del derecho, tal y como se establece en el precitado artículo 23 de la Ley 80 de 1993: **buena fe, debido proceso, equidad, legalidad y Planeación** (El subrayado es nuestro).

(...)

En lo que concierne **con la etapa de planeación**, al punto 17 de la precitada Resolución No. 6345 del 14 de septiembre de 2012 se indicó:

"(...) Implica todo el trabajo de proyecto de contratación y definición de los requerimientos de la misma, esto comprende todas las actuaciones previas, necesarias para soportar legalmente el método de contratación, como los motivos de apertura del proceso de selección de contratistas del Ministerio de Defensa Nacional.

El trámite contractual debe corresponder a una cuidadosa planeación para contribuir en forma eficiente al logro de las funciones y objetivos institucionales, estableciéndose previamente las necesidades de la entidad para el cumplimiento de su deber legal y constitucional, la disponibilidad de

los recursos suficientes para respaldar la contratación, **las condiciones**, los riesgos, plazo, valor, y el esquema que implementará para establecer el seguimiento y control a la actividad, bien o servicio contratado. (Negrillas son nuestras).

En la etapa de planeación se deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- Es vital la planificación y el análisis de conveniencia y oportunidad del proyecto.
- Esta etapa debe efectuarse con previa antelación al inicio del contrato calculando los términos de duración del proceso de selección.
- **Se constituye en la base fundamental del proceso** para adquirir oportunamente el bien o servicio, **en forma adecuada, planificada** y articulada, por lo cual es esencial para la satisfacción oportuna de los requerimientos de la entidad" (Negrillas son nuestras).

Los apartes antes transcritos y resaltados, permiten evidenciar y conocer que el Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal se le describió de manera clara, expresa y precisa el reproche, esto es, frente a la obligación de ejercer vigilancia del negocio contractual, pues tenía el poder habilitante de manejar, administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos a ellos asignados; al igual debía tener el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales; además, se le indicó en dicha oportunidad que tenía la obligación legal de controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, condiciones y términos de la invitación y las especificaciones del contrato; por otro lado, se enfatizó que la gestión contractual debía realizarse igualmente de conformidad con los principios generales del derecho, tal y como se establece en el precitado artículo 23 de la Ley 80 de 1993, como lo era una adecuada **Planeación**.

Corolario de lo expuesto, la afirmación de los apoderados es incierta, pues de lo transcrito es claro que en la parte motiva y resolutive de la imputación frente a la responsabilidad del actor, no se le reprochó el hecho de haber recibido obras sin ésta haber sido culminada, siendo ésta una afirmación de los apoderados que no tienen sustento probatorio, razón por la cual no debe prosperar el cargo de falsa motivación.

Ahora bien, el fallo con responsabilidad fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019 (Fs. 1902 - 1903) en relación con la responsabilidad del actor, luego de valorar las pruebas, determinar el daño y la conducta, expresa lo siguiente:

Seguidamente, y una vez analizados los anteriores negocios en el acápite correspondiente a la valoración probatoria, el despacho realizará el análisis de los demás elementos establecidos en el artículo 5º de la Ley 610 de 2000, así:

RESPONSABILIDAD DE LOS SEÑORES FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO..., en condición de ordenadores del gasto -Contratantes- para la época de los hechos:

...

Ya vimos que el **daño se generó por planear y ejecutar la construcción de una obra sin atender realmente las necesidades y sin que cumpliera su finalidad**, ocasionando como ya se advirtió en letras anteriores en un detrimento que afectó los intereses del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - OCTAVA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCÁ». (Negritas son nuestras).

No obstante, en el trámite del proceso, es ampliamente discutida la responsabilidad que se deriva de los ordenadores del gasto que intervinieron en las diferentes etapas de la contratación y para ello empecemos por establecer que:

FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, quien se desempeñó como comandante y ordenador del gasto del Batallón de BASPC No 08 «CACIQUE CALARCÁ», de conformidad con la Resolución MDN 12767 del 25 de noviembre de 1994, por el período 20 de junio de 2013 al 12 de marzo de 2015, fue quien adelantó el proceso precontractual y suscribió con la empresa **RIMARCO SAS** NIT. 900.075.341-3, el pluricitado contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014.

De lo expuesto se deduce que con relación al contrato de mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPC8, **el comandante alcanzó a estar aproximadamente dos (2) meses como interviniente del negocio contractual, considerando que este inició el 13 de enero de 2015 y tenía un plazo de ejecución inicial de cinco (5) meses.** (Negritas son nuestras).

Menciona en sus argumentos de defensa, que el problema jurídico a resolver por parte del despacho, es determinar si su participación como ordenador del gasto para este contrato fue determinante en la entrega de una obra presuntamente “inútil” y generadora de daño fiscal, frente a lo cual la respuesta por parte de este ente de control es afirmativa, pues fue a partir de su participación en la formación del negocio jurídico que se desencadenó el detrimento; fue él quien adelantó toda la etapa precontractual y parte de la contractual, situación que efectivamente quedó consagrada en el auto de apertura e imputación cuando se plasmó que su obrar contravino el principio de planeación dispuesto entre otras normas, en la Resolución No. 6345 del 14 de septiembre de 2012 «Manual de contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus unidades ejecutoras 2012» y en el mismo informe técnico rendido por el profesional designado, también quedó contemplada dicha situación, a diferencia de lo afirmado por este. (Negritas y subrayas nuestra).

Aunado a lo expuesto, en los estudios previos quedó plasmada la necesidad de creación de la Central Administrativa y Contable del ejército en el eje cafetero en la ciudad de Armenia, disponiéndose **habilitar una edificación de las existentes en la unidad militar para funcionar como CENAC**, así mismo, que se adelantara toda la etapa de escogencia del contratista y se suscribiera el contrato con esta finalidad, **sin embargo, a las dos semanas de inicio de la obra, se dio un vuelco total al objeto contractual, autorizando la demolición de la estructura existente para iniciar de cero con una edificación nueva, desconociendo el principio de planeación consagrado en el Estatuto de Contratación.** (Negritas son nuestras).

Revisando el nexo causal en el caso sub examine, **el daño deviene desde la etapa precontractual, pues si lo que se requería era una obra nueva de dos pisos, así debió concebirse desde el comienzo y fue precisamente dentro de la gestión como ordenador del gasto del TC CALLE MORENO que se concibió el proyecto y se cambió el objeto contractual, pese a que formalmente no quedó estipulado.** (Negrillas son nuestras).

Es menester aclararle al imputado que, para este despacho, el daño no se da por el recibo de una obra sin terminar, el daño es la obra en sí misma, la cual al no haber sido planeada incumple los requisitos de construcción sismo resistente y pone en riesgo a las personas que decidan habitarla. (Negrillas son nuestras).

Es así como se aprecia que la planeación es de imperioso cumplimiento, pues de ella depende el éxito o fracaso de la contratación. Para el presente caso la ausencia de planeación -como pilar de la actividad negocial-, demuestra que la decisión de habilitar -mantenimiento y adecuación de obra existente - y luego de cambiar el objeto contractual, no respondió a necesidades claras y objetivamente identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la contratación.

Si bien en sus alegaciones el Teniente Coronel aduce que su intervención no es directa, ni relevante con desembolsos de dinero, supervisión, ejecución directa de obra y recibo de la misma, dado que no ostentaba el cargo de ordenador del gasto para esta fecha, esto es 6 de octubre de 2015; **fue a partir de la etapa de planeación y celebración del contrato y posteriormente autorizando el cambio de actividades, donde sí estuvo presente y se encontraba habilitado para el manejo de los recursos públicos, que se materializó la construcción de una obra que no cumplió la finalidad.** (Negrillas y subrayas nuestras).

Se debe advertir que, de acuerdo a los estudios previos, el pliego de condiciones, la minuta del contrato y los ítems o actividades pactadas, la obra debía corresponder al «mantenimiento de una construcción existente» y no a la construcción de una obra nueva, como en realidad ocurrió. (Negrillas y subrayas nuestras).

En el desarrollo del presente proceso de responsabilidad fiscal, no se obtuvo prueba alguna que evidenciara el soporte técnico, ni legal, que condujera al cambio del objeto contractual, tampoco se evidencian como quedó reseñado en letras anteriores, los planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y el cumplimiento de los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10.

Finalmente, en cuanto a la aseveración que el daño es potencial, debido a que existe una obra inconclusa que precisamente solo podría cumplir con la norma NSR-10 al momento de ser culminada, es preciso indicar que a este Despacho no le es dable efectuar pronunciamientos sobre supuestos, al día de hoy existe una obra que no genera ningún beneficio pues no puede ser utilizada o habitada, lo que configura un daño presente, cierto, real y cuantificable, pues la gestión realizada con los recursos públicos no logró el objetivo que se quería alcanzar.

La planeación es un concepto incorporado al derecho, a través de las nociones de planeación y planificación como uno de los principales elementos técnicos planteados en la Ley 80 de 1993 y que fueron traídos de las ciencias de la administración y de la ingeniería industrial. En materia del

contrato estatal de obra, es la realización en tiempo de la obra pública, acorde con lo pactado y en términos de presupuesto.

«La preocupación por la planeación obedece a la necesidad colectiva y económica de optimizar recursos, reducir costos, minimizar errores humanos y alcanzar el desarrollo de obras que son de prioridad social y no exclusivamente de orden suntuario, respecto a otras de uso restringido, que impliquen inversión no democrática o parcializada; es parte del concepto de modernización y eficiencia del Estado. La ausencia de planeación crea un uso inadecuado de los recursos públicos por desconocimiento de las necesidades y los medios con que se cuenta.»²

En el ordenamiento legal colombiano la planeación no es delimitada de forma conceptual, sino que por medio de presupuestos y estudios de conveniencia y viabilidad diferentes; además de guías que sirven para darle cumplimiento como principio rector de la contratación estatal según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.³ Su implementación, difusión y desarrollo se presenta como parte del procedimiento para hacer contratos en el Estado y en materia de obras públicas, aún requiere un desarrollo práctico, desde un componente técnico y jurídico en la ejecución, para superar el nivel teórico que la limita al cumplimiento de actividades en la etapa precontractual.

La planeación del contrato de obra, es más que los procedimientos legales y el cumplimiento con el ordenamiento jurídico en materia de contratación pública; porque tiene una finalidad material y social superior, que excede las fórmulas jurídicamente establecidas, toda vez que las obras contratadas deben ser las que se requieren en atención a unos planes de desarrollo vigentes que consideren cuáles son prioritarias, que existan los recursos para su plena ejecución y que no se inicien obras que no se puedan concluir, que se pague por ellas lo justo de acuerdo al mercado, que se cuente con los estudios previos necesarios, realizados en términos racionalmente económicos de tiempo, uso y compromiso de las finanzas públicas y, además, que se entreguen al servicio, con garantía por un tiempo técnicamente establecido acorde con su funcionalidad.⁴

De igual manera, se busca que se contemple su sostenibilidad y continuidad en el tiempo, para que cumplan los objetivos de la responsabilidad social y buen gobierno corporativo, para que el erario público sea aprovechado de manera óptima, sirviendo lo contratado al desarrollo con justicia social (Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006. Exp. 14287). Así, las entidades públicas que contratan, aparte de cumplir con la ley, lo harán dentro de estándares de calidad, planeación estratégica, normas internacionales de contabilidad e información financiera, y regulaciones de construcción, para que se minimicen los problemas de

² Cfr. EXPOSITO VÉLEZ, Juan Carlos. LA CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL DERECHO COLOMBIANO Y ESPAÑOL, reimp. corregida y aumentada 2004, Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

³ «Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos».

⁴ APONTE DÍAZ, Iriana. LAS FALLAS DE PLANEACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA. En: REVISTA DIGITAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO [Documento electrónico] Núm. 11 2014. Ed. Universidad Externado de Colombia. Consultada el 8 de mayo de 2017 en: <http://revistas.uxternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/3831/4087>

clientelismo y corrupción que históricamente han afectado la contratación pública.

En el caso de autos, se observa que el principio de planeación brilla por su ausencia.

Conforme con el material probatorio allegado a este expediente quedó probado que en la ejecución de las obras objeto del mantenimiento y adecuación, el Teniente Coronel CALLE MORENO actuó de forma negligente al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la óptima inversión de los recursos, por tanto, fallará con responsabilidad fiscal en su contra a título de culpa grave, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

Lo antes transcrito y resaltado desmiente el argumento de falsa motivación, pues es claro que en la parte motiva del fallo se describió con suficiente amplitud la razón de la decisión; esto es, las omisiones en la etapa de planeación por parte del actor y se señaló que alcanzó a estar aproximadamente dos (2) meses como interviniente del negocio contractual, considerando que este inició el 13 de enero de 2015 y tenía un plazo de ejecución inicial de cinco (5) meses, teniendo entonces la capacidad de vigilar y controlar la ejecución contractual, razones suficientes para desestimar el cargo, pues está demostrado que no existe falsa motivación y la pretensión de los apoderados está basada en argumentos carentes de sustento probatorio.

Siendo importante destacar que como consta a folios 1891 a 1897 del fallo con responsabilidad fiscal, se analizaron y evaluaron en conjunto las pruebas, que sustentaron el proveído, quedando plenamente demostrada su calidad de gestor fiscal, el daño y el nexo causal, en especial se quieren destacar las siguientes:

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN No. 078 BASPC8- 2014 Y SUS ADICIONALES (CD F. 243).

El negocio contractual en mención fue suscrito por FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, en calidad de contratante y JOISMAR NAYIVE QUIROZ QUINTERO, representante legal de RIMARCO SAS como contratista, el día 24 de diciembre de 2014.

El objeto del contrato fue:

«CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: *El objeto del presente contrato de obra es el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8; de acuerdo a los estudios previos de la entidad y la propuesta adjudicataria».*

En la descripción de la necesidad que se pretendía satisfacer consagrada en los estudios previos, se estableció:

...

*El ejército nacional ha dispuesto la creación de la central administrativa y contable del eje cafetero en la ciudad de Armenia, razón por la cual **debe habilitarse una edificación de las existentes en la unidad militar,***

para funcionar como CENAC y centralizar allí todas las funciones administrativas y contables de las unidades centralizadas en el eje cafetero.

Hasta diciembre de 2014, los batallones de apoyo y servicios para el combate, ejercerán las labores de centralización administrativa y contable, la cual será asignada a la nueva central que se creó en el eje cafetero, con sede en el BASPC8 de la ciudad de Armenia.

Para habilitar el funcionamiento del CENAC, se identificó uno de los edificios, para ser adaptado con los lineamientos básicos del ejército nacional, conforme el tamaño y operatividad del nuevo CENAC con sede en Armenia.

Para hacer funcional la nueva unidad logística, ella debe contar con el espacio, seguridad, equipos, redes y oficinas correspondientes a la tarea que desarrollara en la centralización de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Razón por la cual, debe habilitarse una red de comunicaciones electrónicas idóneas que permitan la interconexión efectiva con el comando central y garantice la correcta y oportuna manipulación de información para el buen funcionamiento del ejército nacional.

...

El edificio destinado para funcionar como CENAC dentro del BASPC8 debe someterse a mantenimiento y adecuación, no solo para garantizar su estabilidad y calidad para la prestación de sus servicios y el bienestar de los militares, sino que debe ser remodelada garantizando la capacidad de albergue requerida y la reubicación de sistemas y redes necesario para cumplir con las labores encomendadas a los responsables de cumplir las funciones administrativas y contables en el ejército nacional en esta parte del país, conforme la misión institucional encomendado a este grupo de militares; **Esta edificación y redes según su naturaleza, así como sus elementos integrantes y condiciones constructivas, deben ser objeto de intervención bajo altas medidas de seguridad.**

...

La vida útil de una edificación es la previsión del período de tiempo para el cual fue construido, durante el cual es susceptible de ser utilizado en las condiciones de calidad requeridas, siempre que se hayan observado las instrucciones de uso y mantenimiento **y se hayan realizado las obras de rehabilitación necesarias e identificadas por personal técnico. Se debe tener en cuenta que las estructuras deben estar en condiciones excelentes para que sirvan de soporte en el uso habitual para el cual fueron concebidas, en la protección, cuidado que los miembros del ejército nacional, funcionamiento de equipos, archivo y atención de usuarios, pero sobre todo se debe atender la priorización y orden para la realización de las obras conforme la planeación institucional** para prevenir pérdida de capacidad operativa, garantizando la capacidad de reacción de los miembros orgánicos de la institución ante cualquier amenaza o ataque a la unidad militar.

El BASPC8 cuenta con varias edificaciones en las cuales se llevan a cabo las labores administrativas y logísticas desde las cuales se cumplen la programación de actividades del comando central; edificaciones que de

acuerdo a la naturaleza propia del ejército nacional, como responsable de la seguridad nacional y el monopolio de las armas, **deben permanecer en el mejor estado posible para su empleo y servicio, sin lugar a evidenciar en ningún momento debilidad estructural, deterioro físico o amenaza de ruina, por cuanto podrían ser objeto de identificación por parte de las fuerzas insurgentes y al margen de la ley, para cometer atentados en contra de la seguridad de las instalaciones militares y con ello menguar la capacidad operativa y de reacción de los miembros orgánicos del ejército nacional...** (Negrillas del despacho).

2. Acta de inicio del contrato 078 BASPC8- 2014, de fecha 13 de enero de 2015, suscrita por JOISMAR NAYIVE QUIROZ QUINTERO -contratista-, JOSÉ WILMAR ADARME ALBARRACÍN -interventor- y FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO -contratante-. (Fs. 1277-1283).
3. Informes semanales de interventoría de fecha 13 al 18, del 19 al 24, del 26 al 31 de enero de 2015; del 02 al 07, del 9 al 14 y del 16 al 21 de febrero de 2015; del 9 al 13 y del 22 al 27 de junio de 2015 suscritos por el grupo FARMAQ (CD F. 243).

4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 079-BASPC08-2014, cuyo objeto consistió en:

«CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8». (Ver CD F. 524 - Pág. 249 y siguientes del documento digital: tomo 1 contrato No. 079 2014).

5. Pliego de Condiciones - noviembre de 2014 (CD F.243; Fs. 1110-1159).
6. **Actas de seguimiento de obra No. 1** del 26 de diciembre de 2014, **No. 2** del 05 de enero de 2015, **No. 3** del 03 de febrero de 2015, **No. 4** del 19 de febrero de 2015, **No. 5** del 26 de febrero de 2015, **acta de suspensión del 19 de marzo de 2015, acta de seguimiento de obra No. 6** del 31 de marzo de 2015 y **No. 7** del 04 de junio de 2015 (Fs. 1578-1600).
7. Resolución No. 0037 del 09 de marzo de 2017, por medio de la cual se declara la liquidación unilateral del contrato (Fs. 387).

8. VISITAS ESPECIALES:

Acta de visita especial realizada en las instalaciones del BASPC8 «Cacique Calarcá», durante la indagación preliminar fiscal el día 21 de diciembre de 2016 (Fs. 277-278).

Acta de visita fiscal especial realizada el 27 de marzo de 2017 por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra objeto del contrato (Fs.410-413).

Acta de visita fiscal especial No. 01 llevada a cabo el día 9 de agosto de 2018, realizada por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra objeto del contrato (Fs. 1566-1568).

Acta de visita fiscal especial No. 02 realizada el 30 de octubre de 2018, por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra objeto del contrato que llama la atención de este despacho (Fs. 1726-1728).

De todo lo expuesto, dentro del fallo con responsabilidad fiscal que nos ocupa se puede advertir que quedó probada con certeza la actividad desplegada por el accionante en desmedro del erario del Estado.

Es así que obra en el archivo digital del expediente (F.243) informe semanal de interventoría semana 1 del 13 al 18 de enero de 2015, en el que consta como actividad la demolición de la estructura existente, situación que es contraria al objeto contractual, con el respectivo soporte fotográfico obrante a página 140 del archivo digital que permite observar la demolición total de la obra existente. Por otro lado, a folio 100 del archivo digital obra informe semanal de interventoría de la semana 2 del 19 al 24 de enero de 2015, que describe dentro de las actividades que se inician las correspondientes a la cimentación; al igual en el informe semanal de interventoría de la semana 3 del 26 al 31 de enero de 2015, que describe dentro de las actividades de cimentación, con el registro fotográfico constante a folios 102 y 103 del archivo digital, siendo evidente y abiertamente notorio que se había demolido totalmente la obra y se estaba construyendo una obra nueva desde su cimentación.

Se reitera que hasta la fecha en que ejerció el accionante dicha calidad - 12 de marzo de 2015- se demostró que se ejecutó la demolición de la obra existente y parte de la construcción de obra nueva, en su cimentación, estructura y mampostería, como lo acredita el acta de interventoría semana número 6 del 16 al 21 de febrero de 2015, correspondientes a 34 días de ejecución contractual, finalmente a folio 221 del archivo digital que obra a folio 243 del proceso, se encuentra acta número 5 del comité de obra donde se describe la participación del TC CALLE MORENO, consignando como observación las actividades adicionales no contempladas en el contrato.

Entonces lo cierto es que, durante la etapa precontractual, contractual y en ejecución del contrato hasta el 12 de marzo de 2015, que el accionante fungió en dicha calidad sí se ejecutaron obras diferentes a las concebidas en la necesidad, en efecto contrarias al objeto del contrato, hecho que por demás era notorio frente a la demolición total de la existente y consecuentemente construcción de obra nueva.

En igual sentido a folios 164 a 166 reposa el acta de seguimiento al contrato de obra 078-BASPC8 del 19 de febrero de 2015, que permite conocer la realización de obras adicionales de mampostería, en este sentido a folios 184 al 188 del expediente digital obra oficio de 24 de febrero de 2015.

IV. PETICION FINAL.

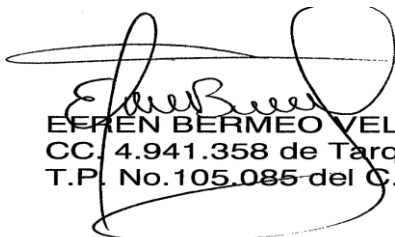
En primer lugar, señor Magistrado, ratificó lo expuesto en la contestación de la demanda, y como segundo lo expuesto en el presente escrito, por lo que atentamente solicito a su Despacho, NEGAR las pretensiones de la

demanda, toda vez que no tienen vocación de prosperidad y por tanto así deberá declararse por ese Honorable Despacho.

V. NOTIFICACIONES.

Las notificaciones personales las recibiré en la carrea 69 No. 44.- 35 piso 15 Edificio Paralelo 26 de la ciudad de Bogotá D.C., y por estado en la secretaría de su Despacho. También en la siguiente dirección de correo electrónico: notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co.

Del señor Magistrado,



EFREN BERMEO VELEZ
CC. 4.941.358 de Tarqui (H)
T.P. No.105.085 del C.S. de la Judicatura.